

LAS DERECHAS PONEN BOMBAS

Cuando se acaban los argumentos, aparecen las bombas. Es posible que quien apele a las armas tenga la razón, sobre todo en aquellos países donde se ha roto todo equilibrio, la proporción misma de la justicia social.

No obstante esta justificación de las armas contra la opresión, la tiranía y el despotismo en cualesquiera de sus manifestaciones, hay que estar alertas contra la instrumentalización de la fuerza bruta. Para que una lucha armada se justifique en el plano histórico concreto, es necesario que se fundamente en una ética política, en una filosofía liberadora del hombre, de las clases oprimidas. Sin tal premisa los movimientos armados devienen en meros grupos de choque, en apasionados defensores del fusil por el fusil mismo, en la violencia engendradora de violencia. La apología de la fuerza bruta no cabe en un mundo civilizado. Arreglar las cosas a balazos es retornar a la jungla; cerrar los ojos a la razón para dar

paso a los sentimientos de la fiera. Un pueblo, un hombre, están obligados a armarse en uso legítimo de la ley universal de la defensa propia. Ante la opresión económica y política, no hay sino un camino: la lucha, la respuesta airada del pueblo sujeto a esclavitud o servidumbre. La violencia del humillado, del oprimido, adquiere una dimensión diferente, pues tiene como propósito fundamental rescatar la dignidad perdida, la razón misma de ser hombre.

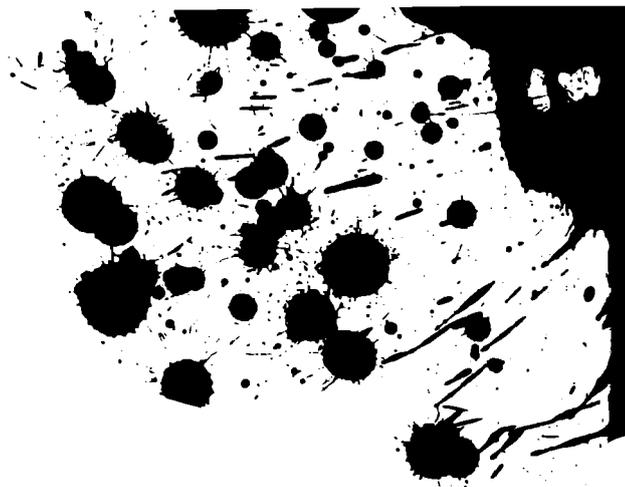
Si el uso de las metralletas y las bombas es consecuencia de situaciones injustas en determinada época, tal método desesperado no ha sido siempre efectivo para lograr el cambio social. En algunas latitudes ha producido millares de muertos inocentes y consolidado, además, el poder que se pretendía destruir. Tal evidencia es historia viva en América Latina, donde la encrucijada es tremenda, y dolorosa para las masas desposeídas. Aquí vuelve a plantearse la violencia como método correcto para hacer valer el derecho de los débiles frente a los poderosos del dinero. Lo cuestionable no es la acción armada de las clases oprimidas contra sus opresores, sino la viabilidad de esta lucha en el contexto latinoamericano y mundial. Se advierte la carencia de apoyo real, en conciencia y organización, a esta vía revolucionaria; la polarización negativa que genera en el seno de la sociedad donde se produce la acción armada de los débiles. El hecho de dar la batalla en condiciones adversas es condenar el proceso a resultados dudosos. Es pelear en el terreno designado por el enemigo, con enorme desventaja. No estamos, claro, por la política de brazos cruzados, pero tampoco deseamos el genocidio. Muchos otros caminos pueden buscarse para la liberación del hombre y la sociedad contemporáneos. Es indiscutible, por otra parte, que los hechos sociales se dan sin participación de la voluntad y cualquier "deber ser" resulta inoperante, por mucho que racionalicemos determinada situación. Sí llama la atención el que mientras la juventud salvadoreña presenta acción armada contra el despotismo oligárquico, en episodios heroicos, sectores políticos llamados a intervenir pacíficamente en el cambio estructural "negocien" a espaldas del pueblo las medidas que hacen posible el estancamiento agrario. El cabildeo arribista de capas



medias —profesionales, sobre todo— adheridas al planteamiento oligárquico y feudal, opuestas a las más tibias reformas al actual sistema, nos indica que aún falta conciencia para llegar a los cambios propuestos. La juventud, honrada por naturaleza, hace el gesto hermoso de morir por la revolución, mientras las derechas aferradas al privilegio acumulan riquezas y doblan al poder público. Hay que decirlo: la injusticia no podrá durar mucho tiempo. La caldera social no aguantará por más tiempo la presión. Las derechas podrán ganar algunas batallas, pero tienen perdida históricamente la guerra. Esa convicción las conduce a un camino errado: poner bombas contra la inteligencia, como si con ello pudieran matar las ideas adversas.

Pero no es la violencia de izquierda, a la que deseamos referirnos, sino a la brutalidad de la derecha latinoamericana. Los detentadores del poder económico y político, empeñados en mantener la explotación del hombre por el hombre, no se detienen en hacer uso de toda clase de medios violentos para defender sus bienes mostrencos. El sistema es incapaz de sostenerse en los principios liberales que le dieron origen. La democracia representativa está en crisis, agotada por la retórica constitucional, inoperante ante las exigencias de quienes, en nombre precisamente de la libertad, imponen el despotismo. Las derechas, actualmente en la conducción del Estado, han perdido credibilidad filosófica. Carecen de una ética consecuente con los tiempos modernos. Este desfase entre los principios, en el papel constitucional, y la realidad social explosiva, explica el porqué a la hora de las confrontaciones ideológicas la derecha utilice la tortura, el garrote, la cárcel, el destierro y el atentado terrorista para conservar el poder ilegítimo que usurpa.

Incluso cuando los gobernantes no se someten, por entero, al esquema oligárquico, son atacados inmisericordemente con el arsenal de la prensa servil al dinero. El epílogo, en estos casos, es el derrocamiento del gobierno que ya no les sirve. O el retroceso del gobernante frente al amo oligárquico que, de verdad, manda en el país. Es evidente que hay una fuerza superior a la Constitución, las leyes del Estado, la voluntad de las masas y la buena fe de los funcionarios públicos. Esa fuerza superior, invisible, es la que maneja los hilos de la economía y el trabajo social. Frente al poder del Gran Dinero no pueden hacer nada el Presidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ejército y los cuerpos de seguridad, nadie puede contra el poder oligárquico. El pueblo unido es el único que puede dar la batalla, cuando el tiempo sea propicio. Y en esta lucha, a largo plazo, el pueblo pareciera estar solo.



En contra del pueblo conspiran permanentemente los **lumpem** de la burguesía criolla, los mandaderos y mensajeros de la oligarquía, los ricos honorarios que se contentan con prestar sus servicios al Gran Patrón. Esta verdad incontrovertible es la que ha hecho de la constitucionalidad un fraude, de las libertades una fraseología hueca y de la “libertad de expresión de la minoría”, un azote para atacar cualquier reforma que afecte a los poderosos. La prensa, en una sociedad como ésta, es la gran ramera.

El imperio del Gran Dinero, del mal dinero, impide la vigencia constitucional y democrática. Impide el ejercicio de la verdadera libertad. Fomenta el caquismo. Sostiene la dictadura de unos pocos sobre la mayoría e instrumentaliza al ejército (creado precisamente para defender el orden constitucional) en favor de la causa oligárquica. Cuando los hombres de uniforme se avocan a los cambios que el país reclama, la oligarquía está lista para hacerlos temblar: se inventan eso del caos y la ruina económica, esconden sus billetes, crean la fuga de capitales, bloquean y sabotean los planes y programas del gobierno, obligan a sus empleados a renunciar de los cargos gubernamentales, presionan y concluyen por imponer sus criterios egoístas.

Para los señores del Gran Dinero no hay problema social en el país. Los trabajadores agrícolas viven en un lecho de rosas. El tema a discutir es la defensa de la propiedad privada, el aumento de sus beneficios económicos, el sometimiento de los poderes del Estado a sus intereses de clase. Lo demás les tiene sin cuidado. La justicia social no les importa; el que se respeten los derechos humanos no les conmueve. El que haya exiliados políticos es un hecho “constitucional”. El fraude electoral la cosa más natural del mundo. Ante las evidencias del “sistema podrido”, ellos no organizan a los miembros de la empresa privada. No se vaya a hablar de aumentar los salarios mínimos, o de efectuar la transformación agraria, que

al unísono se levantan con sus periódicos para acusar al gobierno de "comunista". Si no son atendidos en el reclamo de sus privilegios, comienzan a tirar bombas, y empiezan a ver comunistas hasta debajo de la cama. Esta es la derecha que ha prostituido al país.

Tan grave es el problema que, a estas alturas ni siquiera funciona el esquema republicano planteado por Montesquieu en *El Espíritu de las Leyes*. No hay, en nuestros países, separación de los tres poderes del Estado, dándose la caricatura de regímenes presidencialistas, autocráticos, sin que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia conserven la jurisdicción que les compete. Principios tan elementales como el *habeas corpus* son burlados por magistrados de paja, obedientes al poder absoluto de gobernantes que, para colmo, no han sido electos

por la voluntad popular. Si ello ocurre en las esferas del aparato estatal, reflexiónese en los procedimientos violentos de la derecha, a espaldas de la gendarmería oficial.

La derecha que en la nocturnidad pone bombas, ametralla ciudadanos, atenta contra universidades y centros de investigación, dinamita el local de periódicos y revistas, expresa así su incapacidad política, su falta de ética dentro del contexto social.

Cuando las derechas por cuenta propia recurren a las bombas, las revoluciones sociales se aproximan. La frase no es nuestra, pero es apropiada para caracterizar correctamente el momento que vive El Salvador. I.L.V.

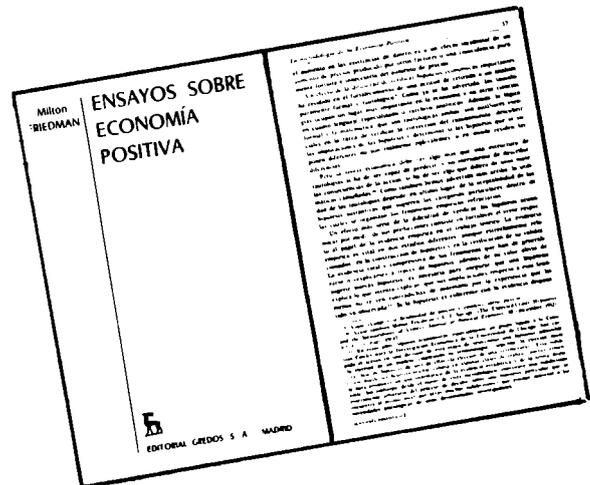
PREMIO NOBEL PARA MILTON FRIEDMAN

Milton Friedman es una paradoja intelectual. Sus *Ensayos de Economía Positiva* reflejan la imagen de lo que debería ser la teoría económica: la teoría deberá ser juzgada, no por el realismo de sus supuestos, sino por la validez de sus predicciones. La Economía positiva habla sobre lo que es, no sobre lo que debe ser; su finalidad es la relevancia analítica, no la exactitud descriptiva.

Y sin embargo, en cada ensayo de *Capitalismo y Libertad*, enfatiza lo que debe ser, por ejemplo, el máximo de libertad individual. En razón de este "debe ser", presiona por cambios definitivos de política en la sociedad capitalista.

Esta paradoja no implica inconsistencia. La preocupación intelectual constante de Friedman, uniendo conjuntamente economía y política, es la relación entre la libertad individual y el papel del Estado en los asuntos económicos. Insiste constantemente en un papel del Estado lo más reducido posible.

Su investigación en la teoría del valor, economía de consumo y teoría monetaria, lo inclina, una y otra vez, hacia la posibilidad inherente del mercado "libre" de reafirmarse a sí mismo, a largo plazo, en una tendencia general hacia un equilibrio de pleno empleo. Lo mejor que puede hacer el Estado, es quitarse de enmedio.



Así pues, su teoría sobre los precios le conduce a afirmar que el sistema de precios puede llevar a revelar los valores individuales. Su contribución a la teoría de consumo rechaza la teoría de que una única inyección de gasto gubernamental puede lograr que la economía vuelva a moverse.

Y su estudio sobre teoría e historia monetaria concluye que la mejor política monetaria es no un constante afinamiento por las autoridades monetarias, sino un aumento automático anual de la oferta monetaria basado en el crecimiento económico real.

Los economistas siempre han discutido sobre la posibilidad de la economía de mercado individualista para llegar a un equilibrio de pleno empleo. La habilidad del sistema de precios para reflejar los valores individuales ha sido combatida desde Adam Smith y Marx. La búsqueda de una medida no-subjetiva de valores continúa inabitable, aunque la pregunta en las últimas tres décadas parecería que se ha cambiado de **qué a quién** mide el valor.

No es de extrañar, entonces, el que Friedman se encuentre envuelto en la controversia. El problema con el que trata es crucial.

Pero mucho de la controversia proviene de su gran punto ciego. Simplemente, Friedman no trata el punto de la distribución de poder. Esto empobrece su visión social y sus prescripciones se ven limitadas a un caso especial.

Friedman soslaya el problema de la distribución de poder con un supuesto absoluto fundamental: el que todos los individuos tienen igual poder social. El grupo es solamente una colectividad, una suma de individuos iguales, y el peso de su poder continúa igual en el transcurso del tiempo.

Si se añade a esto su valor cuasi absoluto de noción individualista de libertad, se encuentra uno obligatoriamente aceptando que el cambio social debe ser voluntario.

En este sentido, la visión social de Friedman se ve enormemente empobrecida. Las prescripciones y predicciones que surgen de un supuesto tan básico, se encuentran sin poder para manejar contextos sociales de gran desigualdad. Si el fenómeno básico de la sociedad salvadoreña es el de un gran desequilibrio de poder, su visión se vuelve, por lo menos sospechosa, si no completamente irrelevante al aplicarla a esta sociedad.

No debería culparse a Friedman sobre el uso que otros hacen de su trabajo. Pero un estudio cuidadoso del artículo de Ignacio Ellacuría en el último número de ECA (Sept./Oct. 1976, "la Historización del concepto de propiedad como principio de desideologización"), nos alerta sobre uno de los peligros de una aplicación a-histórica de la teorización socio-económica pura. Y la metodología desideologizadora de Ellacuría, en la cual él historiza los conceptos, ofrece una contraposición interesante a la concentración de Friedman sobre la validez de la predicción como la única piedra de toque de la ciencia social.

En cierto sentido, Friedman ha sido dejado atrás por los eventos. El problema fundamental de la década de los setenta es la distribución de poder en un mundo desequilibrado. Tanto su teorización económica como su visión social no ofrecen ayuda para solucionar este problema.

James Richard

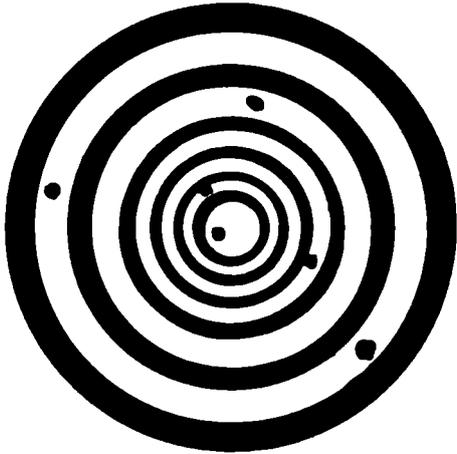


PROCESO A LA IZQUIERDA

Escribir un libro como *Proceso a la izquierda** y ser capaz de afrontar los eventuales calificativos de revisionista y reformista por parte de la izquierda, o de nuevos engaños y ardides del comunismo internacional, por parte de la derecha, requiere una buena dosis de valor y prestigio. Teodoro Petkoff, economista, autor de "Checoslovaquia: el socialismo como problema" y "¿Socialismo para Venezuela?", miembro del Partido Comunista Venezolano hasta 1970 y actual parlamentario del MAS (Movimiento al Socialismo), conocedor de la clandestinidad y la cárcel, ciertamente lo tiene.

El autor parte del hecho desconcertante de que el bello ideal socialista de libertad, justicia y dignidad, en realidad no se hace evidente al pueblo por sí mismo, ni se impone por el peso de su generosidad y racionalidad. Los revolucionarios y sus ideales se encuentran incomunicados y marginados en su propio ghetto.

* — Petkoff, T., *Proceso a la izquierda*, Ed. Planeta, Barcelona 1976 (2a. Ed.).



Sin desconocer la influencia que el enorme poder cultural de la burguesía y la facultad represiva del Estado burgués como “última ratio” pueden tener en ello, Petkoff se pregunta si el modo de ser de la izquierda y la manera de transmitir el planteamiento revolucionario son correctos o si “refuerzan la acción de los mecanismos ideológicos que la burguesía hace operar con respecto a la izquierda y el socialismo” (p. 18).

El análisis de la teoría y la praxis de la izquierda venezolana de los años 1958-1973 y de algunas otras experiencias latinoamericanas de la misma orientación y tiempo parecen confirmar la segunda hipótesis. Es lo que Petkoff llama la “falsa conducta revolucionaria”: vanguardismo voluntarista, dogmatismo autoritario, mitificación de revoluciones realizadas en otras partes y tiempos, culto al “partido guía” extranjero, maximalismo y síndrome apocalíptico, obrerismo aterrador de las clases medias, falta de análisis de coyuntura, reduccionismo de la complejidad social a la “esencia” e incluso aparte de la misma, etc.

En esta situación “está, pues, más que plantea la necesidad de que el pensamiento revolucionario explore nuevas avenidas en relación con cuestiones frente a las cuales su respuesta de hoy es de muy dudosa viabilidad, así como también en relación con la manera de trazar una política ante ellas que pueda ser medida con los criterios de factibilidad que pide todo proyecto revolucionario serio” (p. 138).

En realidad se trata de ir buscando y encontrando el “nuevo modo de ser socialista”, tanto a nivel de principios como de prácticas.

A nivel de principios se defiende la necesidad de ajustar el socialismo a la condición nacional propia, de modo que no sea simple parte, sino vertiente del proceso revolucionario mundial. En América Latina, por otra parte, no se puede olvidar la realidad del imperialismo norteamericano, poderoso pero no invencible, que permite ciertos márgenes de maniobra política no desdeñables. Es esencial esclarecer que la revolucionaria “dictadura del proletariado” no implica necesariamente un gobierno dictatorial, del mismo modo que la vigente “dictadura de la burguesía” es compatible con sistemas de gobierno democrático-burgueses. Por último, el socialismo supone no sólo nuevas relaciones de producción y propiedad, cuyo modelo único por supuesto no es el capitalismo super-centralizado de Estado, sino también nuevas formas de poder político de contenido participativo, libertario y democrático.

En la parte que se refiere al diseño práctico de una política revolucionaria, Petkoff no trata de dar “recetas”, lo que sería contradictorio con su planteamiento, sino de analizar y reflexionar sobre algunos casos concretos: el fenómeno adeco en Venezuela, el peronismo argentino y el “trabalismo” brasileño de Goulart. Rechaza la social-democracia como horizonte político y reconoce que el reformismo naturalmente es reformista (AD y Copei en Venezuela) y no revolucionario. Ante él son igualmente inaceptables las posturas doctrinarias (P.C. argentino ante Perón) o seguidistas (P.C. brasileño ante Goulart). Sin embargo, cerrarse sadomasoquísticamente a cualquier reforma que beneficie parcialmente a las masas o ver la mano peluda del imperialismo tras cualquier reforma de un Estado “relativamente” autónomo, es estéril desahogo ultraizquierdista y no comunicación socialista. “Que sean los hechos mismos los que maten las ilusiones y no las “profecías” de una izquierda que, sin lograr este objetivo, sólo consigue alejarse más y más de los modos como la gente vive la política en la realidad” (p. 173). El reto socialista consiste precisamente en construir sobre y más allá del reformismo —a un nuevo nivel de la lucha de clases y de la conciencia colectiva— la alternativa socialista que dé igualdad, libertad, justicia y dignidad.

“Proceso a la izquierda”, aunque basado principalmente en la experiencia política venezolana, tan peculiar en América Latina, nos parece que rebasa ampliamente esa experiencia concreta. Petkoff se remonta a una reflexión teórico-práctica de elevado nivel político. Su discusión en América Latina puede ser fecunda, aunque en muchos países tal vez demasiado tarde. En El Salvador todavía puede llegar a tiempo, especialmente en la presente coyuntura de la transformación agraria.

N.M.

EL CONFLICTO POLITICO DE LAS CUOTAS UNIVERSITARIAS/

Durante el mes de octubre se ha desatado en la Universidad Nacional un conflicto político, cuyas raíces conviene analizar.

La esencia del conflicto la constituyen las cuotas universitarias. En la actualidad nadie en la Universidad Nacional paga más de diez colones mensuales por su educación universitaria y son bastantes los que ni siquiera pagan diez miserables colones (miserables para un estudiante universitario, riquísimos para la mayoría del pueblo salvadoreño). El intento de subir esas cuotas por las autoridades universitarias ha desatado una violenta protesta por parte de los estudiantes. El resultado, por el momento, ha sido el de un enfrentamiento que ha ocasionado heridos y destrucción.

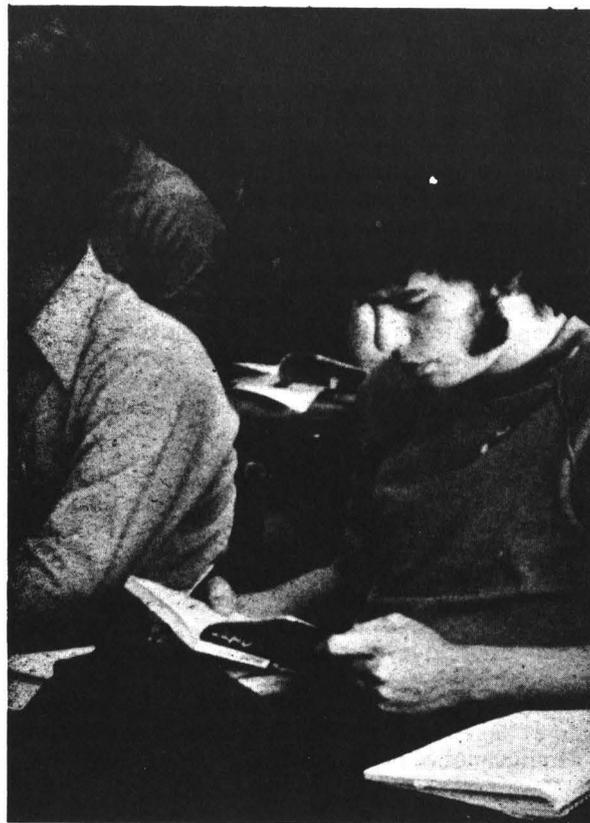
No queremos entrar aquí en todos los aspectos del problema. Y no queremos entrar en la presencia de una fuerza paramilitar represiva dentro de la Universidad ni en sus métodos de mantener el orden universitario. Los estudiantes y los docentes tienen toda la razón en repudiar la presencia de esa fuerza y los métodos que utiliza y puede utilizar. Una Universidad no puede quedar indefensa a los desmanes de cualquiera que los intente, pero su defensa no puede convertirse en pretexto para la represión. Los males de la Universidad son grandes y no se van a arreglar con el temor y la represión. Pero no es éste el tema del comentario.

El tema del comentario son las cuotas. Y respecto de las cuotas los estudiantes no tienen razón. Es absolutamente injusto que 23.205 ciudadanos salvadoreños, no importa de qué condición social, puedan salir ingenieros, médicos, arquitectos, economistas, administradores, etc. pagando 10 colones al mes. Lo menos que cuesta cada uno de ellos al Estado y, por tanto, al sufrido pueblo que paga los impuestos, es 70 colones al mes, dejando de lado los gastos de inversión. ¿Con qué derecho esta élite ciudadana —por muy pobre que se considere respecto de las clases sociales más altas, pero riquísima respecto de la mayoría del país— está pidiendo que le regalen 70 colones al mes en El Salvador donde la mayor parte de las familias no alcanzan a tener ese ingreso en el mes?

Se argumenta que si se suben las cuotas la edu-

cación universitaria se convertirá en más elitista. La objeción es sofisticada. Ya de por sí toda educación universitaria es en El Salvador elitista; lo importante no es de dónde se viene sino hasta dónde se ha llegado y a dónde se quiere ir. El "más" elitista es, entonces, un problema cuantitativo y no cualitativo. Fuera de que se pueden arbitrar modos para ayudar a quienes actualmente no tienen recursos, pero que en virtud de la carrera los van a tener.

Pero de todos modos es absolutamente injusto que por favorecer a los que tienen menos facilidades se regale por igual toda la educación universitaria a los demás, por muy sustanciosos que sean sus ingresos. En este punto las autoridades de la Universidad han sido realmente pusilánimes. ¿Es que entre 23.205 estudiantes sólo hay 287 que deban pagar 70 colones? ¿No son muchísimos más los que debieran pagar bastante más de 70 colones? ¿Só-



lo hay 105 que puedan pagar 60 colones? ¿Hay, por otro lado, 18.010 ciudadanos que pueden pagar únicamente 10 colones mensuales, que por mucho menos de 1.000 colones van a cursar todos los años de su carrera y adquirir un puesto que en un mes o poco más servirá para recuperar toda esa inversión?

Dos cosas son evidentes: una, que el dinero regalado por el Estado a la élite universitaria, que de ningún modo es el pueblo salvadoreño, es un dinero del pueblo, que no va a revertir directamente en favor del pueblo; otra, que hay necesidades en El Salvador de mayor urgencia. Por tanto, estar luchando por la cuota de diez colones es una actitud reaccionaria, antipopular, elitista y de cupo cerrado. Si los estudiantes universitarios van a seguir pagando diez colones mensuales es claro que el cupo universitario no va a poder seguir abierto indefinidamente, porque el costo sería insoportable para el Estado. Las cuotas bajas, en vez de ser una salida para los de menos recursos, es la mejor medida para que a la Universidad llegue a muy pocos o para que la educación universitaria sea deficientísima, con menoscabo de los verdaderos intereses populares.

Hacer política con esta medida es fácil, pero esa política es una gran farsa antipopular. Hay que arbitrar otros medios para financiar la educación universitaria, aunque las masas universitarias protesten egoísticamente. El dinero del pueblo no puede ser malgastado por las élites universitarias. Mientras la educación universitaria no sea algo que llegue a todos, el Estado no tiene obligación alguna de garantizársela a unos pocos, con sacrificio de la mayoría. El problema es de difícil solución, pero la solución no son las cuotas bajas para un grupo de privilegiados.

I.E.

